

ORIGINAL

RECIBIDO FEB 3 26 PM 3:24

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 946

INFORME NEGATIVO

3 de febrero de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 946, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 946 (en adelante, P. del S. 946) tiene como propósito enmendar el Artículo 587 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933 (codificado como 32 LPRA § 2511), según enmendado, a los fines de ordenar a la Rama Judicial crear, publicar y hacer obligatorio el uso de un formulario estandarizado para la rendición trimestral bajo juramento de cuentas recibidas y desembolsadas, con recibos y anejos, en todos los casos de administración judicial de bienes y albaceazgos; establecer que dichos informes trimestrales juramentados serán radicados ante el Tribunal de Primera Instancia y que, tras su juramentación y radicación, se enviará de forma expedita una copia a todas las partes interesadas en el caso; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

ADMINISTRADORES Y ALBACEAS EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

El Capítulo X del Código de Enjuiciamiento Civil rige las normas sobre la presentación de cuentas de administradores y albaceas¹ en Puerto Rico. En primer

¹ El administrador de la herencia es la persona designada para que adopte todas las medidas dirigidas a conservar el patrimonio hereditario y aumentarlo, en lo posible, hasta que pueda distribuirse entre las personas que tienen derecho a recibirlo. CÓD. CIV. PR Art. 1742, 31 LPRA § 11521. El albacea es la

lugar, el Artículo 587 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que tanto los administradores como los albaceas deberán rendir cuentas trimestrales ante el Tribunal de Primera Instancia. Dichas cuentas deben detallar las cantidades recibidas y desembolsadas durante ese período, ir acompañadas de una declaración jurada y de un resguardo que acredite el depósito del saldo en el banco designado por el tribunal. Además, se establece que estas cuentas quedarán disponibles en la secretaría para consulta de cualquiera de las partes interesadas.

En la actualidad, la plataforma SUMAC notifica automáticamente a todas las partes, toda presentación hecha. Por su parte, el Artículo 588 señala que, una vez concluida la liquidación de los bienes, o cuando el administrador o albacea renuncie, sea removido o por cualquier otra causa cese en sus funciones, deberá presentar una cuenta final. Esta rendición, igualmente, debe incluir declaración jurada, recibos y resguardos que respalden las transacciones realizadas. Asimismo, el tribunal, al recibir la cuenta final, ordenará citar a todas las partes interesadas en la herencia o caudal para presenciar la liquidación definitiva, disponiendo también la devolución o cancelación de la fianza prestada, según proceda.



Del mismo modo, el Artículo 589 regula el trámite de aprobación de cuentas. Así, si transcurridos ocho días desde la citación judicial ninguna parte formula oposición, el tribunal podrá aprobar las cuentas mediante auto, siempre que las considere justas y correctas, liberando de responsabilidad al administrador y cancelando la fianza constituida. No obstante, si alguna de las partes impugna, deberá celebrarse una vista en la que se admitirán pruebas y el tribunal resolverá aprobando o desaprobando las cuentas conforme al resultado.

A su vez, el Artículo 590 dispone que el Tribunal de Primera Instancia dictará un auto definitivo aprobando las cuentas o introduciendo modificaciones y cargos contra el administrador o albacea, según lo exijan el derecho y la justicia. En consecuencia, contra ese auto definitivo podrá interponerse un recurso de apelación, garantizando así el derecho a revisión judicial.

De igual manera, el Artículo 591 reconoce que determinados interesados (tales como herederos, legatarios, acreedores, fiadores, sus representantes legítimos, o tutores de menores o incapaces) pueden presentar una petición para que se obligue al administrador o albacea a rendir su cuenta final. Ahora bien, se permite al juez denegar dicha solicitud si han transcurrido menos de quince meses desde el nombramiento y concurren causas fundadas, como dificultades o demoras inevitables en la administración, que impidan la presentación de la liquidación.

Finalmente, el Artículo 592 establece que el auto definitivo de rendición de cuentas debe ordenar la adjudicación del sobrante, ya sea en dinero o en bienes inmuebles, a favor de quienes tengan derecho a recibirlo. De este modo, y solo después de haber satisfecho las deudas del causante y cubierto los gastos de la administración,

persona designada expresamente por el testador para ejecutar o vigilar la ejecución de su última voluntad. Cód. Civ. PR Art. 1739, 31 LPRA § 11511.

se asegura una distribución justa y conforme a derecho del remanente del caudal hereditario.

ADMINISTRADORES Y ALBACEAS EN VIRTUD DEL CÓDIGO CIVIL

Por su parte, el Artículo 1740 del Código Civil establece las facultades legales que tiene el albacea cuando el testador no las ha determinado expresamente en el testamento. Paralelamente, se le reconoce la capacidad de tomar las medidas necesarias para conservar y custodiar los bienes, ejecutar lo ordenado en el testamento y defender su validez en caso de impugnación, intervenir en litigios o incidentes relacionados con los bienes hereditarios, pagar los legados con el consentimiento de los herederos, y finalmente realizar la partición de la herencia en ausencia de un contador partidor.

Por otro lado, el Artículo 1741 regula la facultad de enajenar bienes de la herencia. En este sentido, dispone que el albacea no puede vender o gravar dichos bienes salvo que el testador se lo haya autorizado expresamente. En defecto de esta autorización, solo podrá hacerlo con el consentimiento unánime de los herederos o mediante la autorización judicial correspondiente.

Asimismo, el Artículo 1743 faculta a los herederos para designar a un administrador de la herencia cuando el causante no lo haya hecho. No obstante, en caso de no lograrse un acuerdo entre ellos, será el tribunal quien realice la designación, garantizando así la continuidad en la administración del caudal hereditario. A su vez, el Artículo 1744 determina quiénes están legitimados para solicitar la designación de un administrador. Entre estos se encuentran el albacea, los legitimarios, los herederos o legatarios, así como los acreedores de la herencia que cuenten con título escrito, lo que asegura que los distintos interesados en el caudal puedan promover una gestión ordenada de los bienes.

De igual modo, el Artículo 1745 dispone que, al designar judicialmente al administrador de la herencia, el tribunal debe considerar un orden de prelación. En primer término, se reconoce al cónyuge supérstite, seguido por los herederos, el albacea, los parientes, los acreedores y, finalmente, cualquier otra persona que pueda asumir la encomienda.

Con ello, se busca asegurar que la administración quede en manos de quien tenga un vínculo más cercano o un interés legítimo en la herencia. Finalmente, el Artículo 1746 establece las facultades legales del administrador cuando no han sido determinadas expresamente por el testador. En este marco, se le asigna la obligación de conservar los bienes y procurar que generen rentas y utilidades, vender oportunamente los frutos para depositar su importe junto a los demás fondos de la herencia, cobrar créditos y cancelar sus garantías, realizar y retirar depósitos, pagar deudas, así como llevar a cabo todas aquellas gestiones propias de una buena administración necesarias para cumplir debidamente con su encomienda.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 946 tomó conocimiento de que esta medida es equivalente al P. del S. 592 que recibió un informe negativo suscrito por este cuerpo. En aquel entonces, se recibieron los siguientes memoriales explicativos: Departamento de la Familia y de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Además, hacemos constar que la medida ante nuestra consideración está duplicada con el P. del S. 941.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia no expuso reservas con la aprobación de la medida y le otorgó entera deferencia a los comentarios de la Oficina de Administración de los Tribunales.

OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES



El Poder Judicial, por conducto de su Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), expresó reservas con la aprobación del proyecto. La OAT comentó que, en cuanto a la enmienda propuesta para que las cuentas trimestrales sean "enviados a todas las partes inherentes al caso", los casos de naturaleza civil se presentan de forma digital en los tribunales a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Poder Judicial, así que las cuentas podrán ser presentadas como parte del expediente judicial electrónico. Es decir, la presentación de los informes de cuentas a través de SUMAC cumple con el objetivo expreso de notificación a las partes del caso. Asimismo, la OAT concluyó que la experiencia de los tribunales en el manejo de los casos de administración judicial de bienes no lleva a concluir que exista la necesidad de crear un formulario específico para la presentación del informe de cuentas que deben rendir los administradores judiciales de bienes o los albaceas. A su juicio, los tribunales gozan de la discreción para, en cada caso particular, disponer sobre la forma y manera que deben guardar los informes de cuentas. En todo caso, las controversias que puedan surgir entre las partes sobre el contenido, notificación, corrección o insuficiencia de estos informes pueden ser traídas ante la consideración del tribunal y este resolver mediante orden o resolución de acuerdo con las particularidades presentes en cada caso o de acuerdo con las necesidades particulares relativas a la naturaleza y cuantía de los bienes de la persona fallecida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de lo Jurídico señala que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 946, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 946, tomó conocimiento de que dicha medida es sustancialmente equivalente al P. del S. 592, proyecto que fue previamente evaluado por este Cuerpo y respecto del cual se rindió un informe negativo. En el análisis del P. del S. 592, esta Comisión examinó detenidamente el Código de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil de Puerto Rico, así como los comentarios remitidos por el Departamento de la Familia y por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), a cuyos planteamientos se les concedió amplia deferencia por tratarse de una medida que incide directamente sobre la administración de los tribunales.

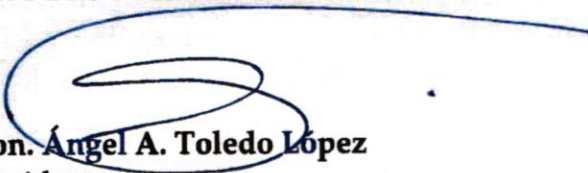


En aquella ocasión, la Comisión coincidió con la OAT en que el ordenamiento vigente ya provee mecanismos adecuados para la rendición y notificación de cuentas por parte de administradores y albaceas, particularmente mediante el uso del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), que permite la radicación electrónica de informes y la notificación automática a las partes interesadas. Asimismo, se determinó que la imposición legislativa de un formulario estandarizado obligatorio constituiría una duplicación innecesaria, sin aportar un beneficio adicional real en términos de transparencia, acceso a la información o eficiencia procesal. Del mismo modo, se concluyó que las controversias relacionadas con el contenido, corrección o suficiencia de las cuentas rendidas ya cuentan con cauces procesales adecuados bajo la discreción judicial, lo que permite atender las particularidades de cada caso sin imponer rigideces innecesarias que podrían resultar incompatibles con la diversidad de situaciones que se presentan en los procesos sucesorios.

A la luz de lo anterior, y habiéndose constatado que el P. del S. 946 reproduce en esencia los mismos planteamientos, mecanismos y efectos normativos contenidos en el P. del S. 592, esta Comisión determina que subsisten íntegramente los fundamentos que dieron lugar al informe negativo previamente emitido. En consecuencia, por las mismas razones y consideraciones expuestas en el análisis y recomendación adversa del P. del S. 592, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico recomienda no la aprobación del P. del S. 946.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 946**, no recomendando su aprobación.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico